



NUE 48-A-2020 (CE)

XXXXXX contra Centro Nacional de Registros (CNR)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con treinta y ocho minutos del día diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.

I. Descripción del caso

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **XXXXXXXXXXXX**, en adelante el apelante, en contra de la resolución emitida por el oficial de información del **Centro Nacional de Registros -CNR-**, que denegó la información consistente en: *“i) información de la ubicación geográfica o catastral en sistemas de coordenadas WGS 84 o NAD 27, conteniendo el código catastral y georreferenciación de parcelas, lotes, colonias, edificios o las coordenadas geodésicas X, Y y otro que permita el análisis estadístico georreferenciado en análisis multidimensional – es escalas más específicas en el territorio- todo lo anterior para los municipios del AMSS, que son 12 del departamento de San Salvador: Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, San Marcos, San Martín, Tonacatepeque, Soyapango y la ciudad capital de San Salvador; y del departamento de La Libertad, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla.”*

En ese sentido, la oficial de información de dicho ente obligado, en el auto impugnado, emitido el 11 de febrero de 2019, resolvió sobre la solicitud de referencia No. CNR-2020-0029, trasladar lo comunicado la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional al ciudadano e informarle la vía para acceder a la información solicitada.

Por lo que, el objeto de controversia en este procedimiento, es la denegatoria de la entrega de información correspondiente a *“i) información de la ubicación geográfica o catastral en sistemas de coordenadas WGS 84 o NAD 27, conteniendo el código catastral y*

georreferenciación de parcelas, lotes, colonias, edificios o las coordenadas geodésicas X, Y y otro que permita el análisis estadístico georreferenciado en análisis multidimensional – es escalas más específicas en el territorio- todo lo anterior para los municipios del AMSS, que son 12 del departamento de San Salvador: Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, San Marcos, San Martín, Tonacatepeque, Soyapango y la ciudad capital de San Salvador, y del departamento de La Libertad, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla.”

El Instituto admitió la apelación del caso y designó a la Comisionada **Claudia Liduvina Escobar Campos**, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

En el informe justificativo, rendido por el licenciado **XXXXXXXXXX** , Apoderado Judicial con cláusulas especiales de la Directora Ejecutiva del **CNR**, informó en lo medular, el mismo manifestó que ratificaba lo resuelto por la oficial de información del CNR, además, manifestó que los aranceles comunicados por parte de la oficial de información no constituyen una doble tributación, tomando como base el artículo 6 del Decreto Legislativo 462, además de ello manifestó que la oficial de información no conculcó el Derecho de Acceso a la Información Pública del ciudadano, y que la misma le orientó en cómo obtener los servicios con los que cuenta el CNR. Finalmente estableció que con base el artículo 5 del citado decreto legislativo 5 y 6 se ha establecido que todos los servicios que tiene el CNR a su disposición, deben de ser remunerados y no pueden prestarse bajo ningún concepto de forma gratuita.

En audiencia oral, se realizó ofrecimiento probatorio por las partes; el representante del ente obligado remitió constancia de fecha 11 de febrero de 2021; por otro lado, la parte apelante incorporó como prueba en este procedimiento: a) el informe de rendición de cuentas correspondiente a mayo de dos mil dieciocho a junio de dos mil diecinueve, y b) los criterios resolutivos de este Instituto en relación a los años dos mil trece a dos mil diecisiete. Al respecto, el Pleno de Comisionadas y Comisionados resolvió admitir toda la prueba a excepción del documento que contiene los criterios resolutivos por parte de este Instituto. Posteriormente, en la fase de alegatos la representación del ente obligado, en sus alegatos iniciales el licenciado **XXXXXX** reiteró los argumentos vertidos en su informe de ley, y

agregó que el servicio requerido no se le había brindado al apelante porque él no había efectuado el pago, Por su parte el apelante manifestó que la conculcación al pago por acceso de la información solicitada constituía un obstáculo al Derecho de Acceso a la Información Pública.

Análisis del caso

El análisis jurídico del presente caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** Breves consideraciones sobre el derecho de acceso a la información pública (DAIP) y su relación de entrega en el formato solicitado; **(II)** consideraciones sobre la forma de organización de la Administración Pública y **(III)** análisis de la prueba aportada en el presente caso y resolución del fondo conforme a ello.

I. El DAIP implica el libre acceso, por parte de las personas, a las fuentes que contienen datos de relevancia pública. La búsqueda y obtención de la información se proyecta frente a los poderes públicos y a cualquier entidad, organismo o persona que administre recursos públicos o bienes del Estado o que, en general, ejecute actos de la Administración, según lo establecido en el art. 7 de la LAIP, pues existe un principio general de máxima publicidad o divulgación y transparencia de las actuaciones estatales y gestión de fondos públicos.

Asimismo, es importante mencionar que, la Sala de lo Contencioso Administrativo reconoció que como regla general toda la información que resguarden los entes obligados en el desempeño de sus funciones institucionales, debe ponerse a disposición del público y la negativa injustificada de su entrega, podría constituir una afectación al DAIP, y un incumplimiento legal.

Ahora bien, el DAIP no es una prerrogativa absoluta, su interacción con otros derechos de igual rango posibilita escenarios de restricciones justificadas. En este sentido la LAIP regula las limitantes para acceder a la información pública, que en términos generales

se clasifican en: la información reservada –art. 19-; información confidencial (en todas sus dimensiones) –art. 24; y la información inexistente –art. 73-, todos de la LAIP.

En esa misma línea corresponde a este Instituto, como garante del derecho de acceso a la Información (art. 58 letra “a” de la LAIP), realizar la labor de armonización y determinación del alcance de tal derecho, así como la ponderación cuando este entre colisión con otros derechos.

II. La Constitución de la República adoptó una forma de Estado unitario, sin embargo la Administración Pública no se resume en el poder central del Estado (Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios y Viceministerios), sino que se diversifica en una serie de órganos y entes, a través de las técnicas de la desconcentración y la descentralización, así lo ha establecido la Sala de lo Contencioso Administrativo¹.

Para el caso de autos es necesario realizar algunas consideraciones sobre la descentralización de la Administración Pública, ya que esta forma de organización se encuentra revestida de algunas características relevantes que facilitan conocer el tratamiento se le otorgará a las mismas, y es que la descentralización es una situación de autonomía administrativa y financiera en que se encuentran algunos entes de derecho público creados por la ley, que gozan de independencia respecto de la administración central, pero deben su existencia a un acto de autoridad del Estado y se hallan sujetos en diversos aspectos a su fiscalización y dirección. De ahí que se les denomina instituciones, entes u órganos autónomos.

La nota más relevante de estas instituciones es que el patrimonio y el manejo presupuestario de estos, guardan estrecha relación con el Fondo General del Estado del cual forman parte, ya sea porque provienen de una asignación especial de recursos, como lo establece el art. 225 de la Constitución, o porque, según lo dispone el art. 227 Inc. 4 de la Constitución., dada la naturaleza de tales entidades, éstas deben regirse por presupuestos especiales y sistemas de salarios aprobados por el Órgano Legislativo.

Dicho lo anterior, teniendo en cuenta que el Centro Nacional de Registros, tiene como base de creación y actuación el Decreto Ejecutivo número 62 del 5 de diciembre de 1994,

¹ Sentencia de las 8 horas y treinta y un minutos del 15-I-2014, emitida bajo la referencia 456-2010.

publicado en el Diario Oficial número 227 y Decreto Legislativo número 462, del 5 de octubre de 1995, publicado en el Diario Oficial número 187, es necesario establecer que el mismo se constituye como un organismo descentralizado. En ese sentido, se establece que esta institución cuenta con autonomía, que se extienden al ámbito económico, técnico y administrativo, por definición.

En cuanto al ámbito autonómico económico es necesario, traer a cuento, que, además de las asignaciones presupuestarias que recibe por orden legal; la institución cuenta con habilitación de cobro de tasas por servicios de registro y catastro, y se encuentra conminada a efectuar los cobros por prestación de servicios que corresponden, de acuerdo a los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo número 462; en ese sentido, proceder de otra forma implicaría una contravención al orden legal establecido.

III. Ahora bien, este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación es pronunciarse sobre la entrega de la información solicitada por las apelante consistente en su conjunto en: *“i) información de la ubicación geográfica o catastral en sistemas de coordenadas WGS 84 o NAD 27, conteniendo el código catastral y georreferenciación de parcelas, lotes, colonias, edificios o las coordenadas geodésicas X, Y y otro que permita el análisis estadístico georreferenciado en análisis multidimensional – es escalas más específicas en el territorio- todo lo anterior para los municipios del AMSS, que son 12 del departamento de San Salvador: Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, San Marcos, San Martín, Tonacatepeque, Soyapango y la ciudad capital de San Salvador, y del departamento de La Libertad, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla.”*. Siendo el objeto de controversia la entrega de este último.

Y de lo cual la parte apelante manifestó su inconformidad, siendo su petición que se revoque la resolución pronunciada por dicho ente y que se ordene la entrega de la información; sin embargo, este Instituto, con base al análisis efectuado a la información solicitada, el expediente administrativo de la solicitud de información realizada a CNR y el acuerdo de tasas y precios de productos y servicios de la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, que establece la obligación de pagos.

En ese sentido, se procede a realizar el análisis de la prueba que corre agregada al expediente administrativo, de conformidad a lo establecido en los artículos 341 y 416 del CPCM en relación al artículo 106 de la LPA, que establecen, de forma categórica el valor probatorio que merecen los medios probatorios consisten en documentos públicos y privados, que consten en el procedimiento. Siendo el caso de los documentos públicos y privados que constituyen prueba fehaciente de los hechos, siempre y cuando su contenido no haya sido controvertido.

- 1) El principal elemento a valorar es la incorporación de la constancia de fecha 11 de febrero de 2021; a través del cual se establece que no se ha procedido al pago de productos catastrales por parte del apelante.
- 2) El informe de rendición de cuentas correspondiente a mayo de dos mil dieciocho a junio de dos mil diecinueve, que establece la voluntad política institucional de garantizar los derechos de los ciudadanos y la obligación de dar respuestas coordinadas a los ciudadanos.
- 3) Expediente administrativo de la solicitud de información presentada en el **CNR**.

Es imperante efectuar el análisis de la prueba detallada, de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable al caso, que para este procedimiento, hacemos alusión a la LAIP y Decreto Legislativo 462, en relación con las tarifas.

Ahora bien, con base a lo señalado en el romano II del presente análisis del caso, cabe resaltar que dentro de las atribuciones que tiene el **CNR** es la de cobrar tasas por los servicios de registro y catastro de conformidad con el arancel y las tarifas vigentes. De igual forma, se establece que se prohíbe la prestación gratuita de servicios a cualquier persona natural o jurídica, así como cualquier forma de exención o rebaja no establecida por ley o por los tratados internacionales.

En este sentido, se ha verificado que el apelante pretende acceder a información que produce Dirección del Instituto Geográfico, a través de la prestación de un servicio, de conformidad a la LAIP. Es decir que la petición del mismo fue remitida de manera errónea, y

la oficial de información de conformidad a su deber orientador procedió a encauzar su petición, dando a conocer la vía procedimental.

Dicho lo anterior, este Instituto advierte que en el presente caso no constituye un derecho de acceso a la información pública, sino que es una prestación de servicios que otorga el **CNR**, de acuerdo a la naturaleza y atribuciones mencionadas anteriormente; por lo que, se señala que la solicitud del ciudadano no es la vía idónea para hacer efectiva su pretensión.

De igual forma, con la constancia remitida por parte del ente obligado, se advierte que no se ha procedido a conceder lo solicitado, en virtud de la falta de pago del servicio por parte del apelante. Todo con fundamento en una obligación legal previamente establecida, que no afecta en nada, lo establecido en el informe de labores presentado, el cual únicamente constituye un documento de voluntad política.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la información objeto del recurso de apelación que hoy se ventila, se advierte que el mismo no constituye información pública, sino un servicio que presta el **CNR** de acuerdo a su naturaleza, funciones y atribuciones citadas anteriormente. Por lo que, este Instituto considera procedente confirmar la resolución emitida por la oficial de información del ente obligado, por las razones expuestas anteriormente.

Decisión del caso

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los artículos 6 y 18 de la Cn., 94, 96 letra b. y 102 de la LAIP, este Instituto resuelve:

a) Confirmar la resolución pronunciada por la oficial de Información del **Centro Nacional de Registros -CNR-**, de fecha 12 de febrero de 2020.

b) Devolver al oficial de información del **CNR**, el expediente administrativo relacionado con el presente caso, una vez esta resolución adquiera estado de firmeza. Dicho

expediente administrativo deberá ser retirado en las oficinas de este Instituto por dicha servidora pública o persona debidamente autorizada.

c) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contenciosa Administrativa de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, si así se considerase necesario.

d) Archivar el presente procedimiento al momento que la presente resolución tenga grado de firmeza.

e) Publíquese esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-

-----A.GREGORI-----ILEGIBLE-----ILEGIBLE-----PRONUNCIAD
A POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LO
SUSCRIBEN. "RUBRICADAS"